



CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010

IX Legislatura

Núm. 169

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ

Sesión plenaria núm. 160

celebrada el jueves 27 de mayo de 2010

Página

ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (B.O.E. número 126, de 24 de mayo de 2010). Correcciones de error en B.O.E. número 127, de 25 de mayo de 2010 y B.O.E. número 128, de 26 de mayo de 2010. (Número de expediente 130/000031.)

3

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 55-1, de 9 de febrero de 2010. (Número de expediente 121/000055.)

22

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.)

31

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación.)

32

Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y **Azpiroz Villar**, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor **Membrado Giner**, del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene el señor **ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves)**.

Página

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) 3

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se aprueba por 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 168 votos a favor, 169 en contra y 13 abstenciones.

Página.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) 32

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009 32

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2009 32

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y declaraciones al mismo 32

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010 32

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Croacia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 32

Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.

Página

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) 32

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el texto del dictamen.

Se levanta la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

— **REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000031.)**

El señor **PRESIDENTE**: Señorías, se reanuda la sesión.

Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

El Gobierno tiene la palabra para exponer las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley.

La señora vicepresidenta segunda tiene la palabra.

La señora **VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA** (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde presentar en su debate de convalidación el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Como bien saben,

vivimos una coyuntura económica muy difícil. La situación es extraordinariamente volátil y los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría que, sin embargo, no está exenta de riesgos. Por un lado, la economía mundial ha iniciado el camino de la recuperación, un camino al que se ha unido España desde comienzos de año, pero, al mismo tiempo que la reactivación de la economía real gana terreno, resurgen los brotes de inestabilidad financiera. Ahora han desplazado su foco desde los mercados de financiación privada hacia los de deuda soberana, con un fuerte impacto sobre el mercado cambiario y la renta variable. En estas circunstancias ha sido necesaria de nuevo la actuación coordinada y decidida a nivel europeo para poner freno a las tensiones financieras, unas tensiones que habían aumentado hasta niveles desconocidos desde el nacimiento del euro y que han llegado a amenazar la estabilidad de nuestra moneda común. Estas presiones financieras deben ser afrontadas con decisión y de manera inmediata para evitar que se conviertan en un serio obstáculo para la recuperación. Nos encontramos en un momento crucial, un momento en el que las medidas que adoptemos van a ser determinantes para el desarrollo de nuestra economía durante los próximos años.

Señorías, durante la primera semana de mayo las tensiones en los mercados financieros europeos alcanzaron su máxima intensidad. En esos días los gobiernos europeos mantuvimos una intensa actividad para buscar una respuesta adecuada para contener las turbulencias financieras. Se convocó un eurogrupo extraordinario el día 2 de mayo, que decidió unánimemente poner en marcha un sistema de préstamos bilaterales a Grecia, coordinados por la Comisión, por importe de 80.000 millones de euros. A partir de ese momento, los gobiernos de la zona euro pusieron en marcha sus procedimientos legislativos para poder llegar a tiempo en este primer desembolso, de manera que el día 8 de mayo se firman los acuerdos requeridos. No obstante, el efecto estabilizador del acuerdo de 2 de mayo duró solamente un día y el martes 4 se acentuó el nerviosismo y la desconfianza en los mercados financieros, poniendo en cuestión la estabilidad del euro. El contagio debido a la inquietud creciente sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas no solamente se evidenciaba en los países periféricos de la zona euro, sino que se extendió a todos los mercados. A lo largo de esa semana se produjo un fuerte incremento de las primas de la deuda pública, especialmente notable en Grecia, Portugal e Irlanda, pero importante también en España, Italia o Bélgica, así como una considerable caída de las bolsas. El índice eurostoxx 50 perdió un 11 por ciento y el euro se depreciaba más de un 4 por ciento frente al dólar. Adicionalmente, y ante la volatilidad en estos mercados, la falta de liquidez se fue acentuando a medida que crecía la incertidumbre, generando así mayores tensiones.

Ante esta situación, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro se reunieron el 7 de mayo para reafirmar el compromiso de asegurar la estabilidad, la unidad y la

integridad de la unión económica y monetaria. Se convino que la Comisión propusiera un mecanismo europeo de estabilización financiera que habría de ser aprobado en el Consejo Ecofin que se convocó de manera extraordinaria el 9 de mayo. En este Consejo los ministros de Economía aprobamos la creación del mecanismo europeo de estabilización financiera que, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, podrá movilizar hasta 750.000 millones de euros para apoyar a cualquier Estado miembro en dificultades causadas por circunstancias extraordinarias. Paralelamente, el Banco Central Europeo aprobó medidas extraordinarias para proveer liquidez e intervenir en los mercados de deuda a fin de reducir su volatilidad. Se alcanzó también un acuerdo para reforzar la coordinación económica a nivel europeo como un mejor mecanismo de prevención de crisis en el futuro. En paralelo, seguimos trabajando intensamente en la reforma del sector financiero para corregir algunos fallos del mercado, fallos que en ocasiones pueden llevar a que los mercados financieros actúen como un mecanismo de amplificación de los *shocks*, convirtiéndose en un foco de inestabilidad con efectos económicos y socialmente indeseables. Pero esta reforma no debe hacerse de manera precipitada, sino que debe orientarse a asegurar un mejor sistema financiero en el medio plazo. Tan importante como actuar a nivel europeo es hacerlo a nivel nacional. Ciertamente, los ataques especulativos contra la deuda o cualquier otro mercado financiero de un país se pueden iniciar por motivos escasamente relacionados con los fundamentos económicos, incluso por rumores que rozan lo disparatado, pero la realidad es que a medio plazo los mercados tienden a orientar su comportamiento en función de la situación real de una economía. Por ello, el riesgo de que las presiones de los mercados se hagan persistentes y amenacen con tener un fuerte impacto real se reduce significativamente cuando se corrigen los principales desequilibrios macroeconómicos. En consecuencia, es urgente replantear el ritmo de la estrategia de salida de la crisis. Así lo están haciendo los principales países de nuestro entorno, que han anunciado también medidas para acelerar la reducción de sus déficit públicos.

Señorías, el Gobierno tiene dos preocupaciones principales: el paro y el déficit público. La reducción del desempleo continúa siendo un objetivo absolutamente prioritario, pero, ante la gran inestabilidad reinante en los mercados de deuda, ahora es más cierto que nunca que la estabilidad macroeconómica constituye una condición imprescindible para impulsar la recuperación de la actividad económica y del empleo. El Gobierno ya acometió las primeras medidas de consolidación en los presupuestos para 2010, medidas que fueron complementadas por otras adicionales que el Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de enero al aprobar la actualización del programa de estabilidad. Entre ellas, destaca el acuerdo de no disponibilidad por importe de 5.000 millones de euros y una reducción de la oferta de empleo público, todo ello en el marco del Plan de auste-

ridad 2011-2013 y del Plan de acción inmediata para reducir el gasto público. Igualmente, en esa fecha se aprobaron sendos acuerdos marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas con comunidades autónomas y administraciones locales. Con posterioridad, se ha aprobado un plan de racionalización del gasto farmacéutico y una racionalización de la estructura de la Administración General del Estado.

Ahora, manteniendo el objetivo presupuestario para el año 2013, pero a la vista de las nuevas circunstancias que motivaron los acuerdos del Ecofin a los que me he referido, es imprescindible y urgente realizar un nuevo esfuerzo extraordinario de ajuste y austeridad presupuestaria para reducir con mayor rapidez el déficit público. Y este es el objetivo que justifica el real decreto-ley que hoy presentamos a la Cámara. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el programa de estabilidad y crecimiento, que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por ciento del PIB frente al 7,5 previsto inicialmente. En concreto, las medidas aprobadas conducen a concentrar casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011, dejando para los dos últimos años del programa un tercio de la consolidación total. Estaríamos así hablando de un déficit del 9,3 por ciento en el año 2010, del 6 por ciento en 2011, del 4,4 por ciento en 2012 y del 3 por ciento en 2013.

Permítame que, antes de explicar el contenido concreto del real decreto ley, me refiera a las medidas contempladas en otros tres acuerdos que adoptó el Consejo de Ministros el pasado jueves con la idéntica finalidad de acelerar la reducción del déficit. Mediante estos acuerdos se declaran no disponibles créditos por importe de 2.425 millones de euros en el presupuesto del Estado para 2010, que se corresponden con una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en ayuda oficial al desarrollo. Es una declaración de no disponibilidad adicional a la efectuada en enero de este año. Asimismo, se aprueba el plan de revisión de todos los programas y políticas de gasto, dando así concreción a lo establecido en los planes aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero. El Plan de revisión del gasto 2011-2013 contempla que por el lado del gasto los factores esenciales que contribuyan a este ajuste serán la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Entre estas medidas de ajuste se encuentran la aplicación de la tasa de reposición del 10 por ciento en las ofertas de empleo público hasta el año 2013; la reducción en un 15 por ciento en términos nominales en los gastos en bienes corrientes y servicios; la aplicación de los acuerdos de no disponibilidad a las inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011 y el ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes, además de una

reducción en un 25 por ciento del resto de inversiones en el periodo 2011-2013; la reducción de la ayuda oficial al desarrollo en 2011 en 500 millones adicionales a los 300 millones para 2010; y, finalmente, se prevé también la reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlo compatible con los objetivos de estabilidad acordados.

Además, el Consejo de Ministros aprobó las propuestas de modificación del acuerdo marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y con las corporaciones locales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 de 22 de marzo y 7 de abril de 2010, respectivamente. Es una modificación que obedece a la necesidad de que las administraciones territoriales cooperen también en este nuevo objetivo más ambicioso de consolidación fiscal. A este objetivo de consolidación fiscal se dirigen tanto los acuerdos que acabo de mencionar como el real decreto-ley sobre cuya convalidación ha de pronunciarse hoy la Cámara.

Señorías, en esta norma se prevé, en primer lugar, una reducción media del 5 por ciento en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad, de modo que el porcentaje de reducción sea mayor para aquellos que perciben unas mayores retribuciones. Con ello se pretende minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. Por su parte, los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por ciento y un 15 por ciento correspondiente al Gobierno. En cuanto al personal laboral, la aplicación del descuento será del 5 por ciento sobre los conceptos retributivos que integran la nómina y quedarán completamente excluidos de la reducción quienes cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. A partir de ahí, en el ámbito de cada convenio se establece la posibilidad de abrir el proceso de negociación para acordar una aplicación diferente, pero ya sobre una masa salarial reducida en un 5 por ciento. La reducción de las retribuciones será de aplicación para todas las administraciones públicas. El ahorro total que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. El efecto en las administraciones territoriales será de un menor gasto de 1.765 millones este año y de 3.465 millones en el año 2011. La adopción de estas medidas se realiza al amparo del artículo 38.10 del Estatuto básico del empleado público, suspendiendo parcialmente la aplicación de las cláusulas con contenido retributivo del Acuerdo Gobierno-sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social firmado en septiembre de 2009. Igualmente, para el caso de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles se introduce una rebaja arancelaria general del 5 por ciento para los documentos de cuantía.

En segundo lugar, se suspende excepcionalmente la revalorización de las pensiones de carácter contributivo, con las matizaciones que señalaré, para el año 2011. Los perceptores de pensiones han tenido en todo momento

garantizado mediante las correspondientes revalorizaciones su poder adquisitivo, y especialmente los perceptores de pensiones mínimas, pues sus cuantías han mejorado en los últimos años, año tras año, por encima del índice de precios al consumo. En esta medida también hemos tratado de aplicar un principio de equidad, de manera que hemos entendido que la suspensión excepcional de la revalorización no debe afectar a las personas con prestaciones más bajas, como son aquellas que están por debajo de la pensión mínima fijada para cada año y que por sus circunstancias económicas y familiares son receptoras de complementos a mínimos, así como las pensiones del SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado. El real decreto-ley recoge también la supresión del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. El texto aprobado hoy adelanta con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010 la eliminación de este régimen cuya suspensión estaba ya prevista para el 1 de enero de 2013; un régimen que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. La reducción del gasto que se derivará de esta medida supondrá 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones se restarán ya este mismo año, sumándose a esta cifra 50 millones adicionales en el año 2011.

Una tercera medida consiste en la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejado retroactividad desde la fecha en que se incurra en el mismo. Así, desde el 1 de junio de 2010 el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. El real decreto-ley establece igualmente la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida va a originar un menor gasto de 300 millones de euros en el año 2011, de los que 200 millones corresponderán al Estado y 100 a las administraciones territoriales.

Asimismo, el Gobierno ha decidido dejar sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Ello supone un ahorro estimado de 1.250 millones de euros. En concreto, para los nacimientos o adopciones producidos a partir del 1 de enero de 2011 se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas para suprimir esta deducción por nacimiento o adopción, y se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para suprimir la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción.

El decreto-ley contiene otra serie de medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico. Los ajustes en este ámbito se sitúan en la línea establecida por el Pleno del

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 18 de marzo; un consejo que acordó un conjunto de acciones para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, así como unas medidas de racionalización del gasto farmacéutico a corto plazo que ya fueron objeto del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo. El real decreto-ley que presento hoy introduce medidas complementarias a las ya adoptadas, ajustes adicionales para reducir la factura farmacéutica pública de productos sanitarios no afectados por el real decreto-ley anterior. Se facilita, además, la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos y la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas sobre la factura farmacéutica en 1.300 millones de euros, en torno a 275 millones se podrán detraer del gasto público este mismo año.

Asimismo, se adoptan medidas en materia económico-financiera relacionadas con las entidades locales para garantizar su contribución al esfuerzo de consolidación fiscal, así como para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades. Se establece la afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos, la reducción del endeudamiento o, en su caso, la financiación de inversiones. Se señala, además, que durante 2011 las entidades locales no podrán concentrar operaciones de endeudamiento a largo plazo. Asimismo, se introducen varias medidas en materia de provisión de puestos de trabajo de los empleados públicos para mejorar el control de la gestión económico-financiera y garantizar la independencia en su función. Señoras, el real decreto-ley contiene medidas para reforzar el control del gasto público, entre ellas el reforzamiento de las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, que habrá de emitir informe preceptivo y vinculante en los contratos de colaboración público-privada y en los de concesión de obra pública para evaluar las repercusiones presupuestarias, compromisos financieros e incidencia en déficit de tales contratos. En el mismo sentido, el Ministerio de Economía ha de emitir informe favorable para la aprobación de decisiones que puedan tener un impacto sobre el déficit en relación con la acción del servicio público estatal en el exterior. Con esta misma finalidad, se recogen otras medidas, como la no creación de ninguna nueva agencia estatal durante este año.

En cuanto al requisito constitucional habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, creo que mi intervención ha sido suficientemente explícita sobre la necesidad evidente, a juicio del Gobierno, de adoptar y aplicar sin dilaciones estas medidas de reducción del déficit público. Lo requiere la respuesta a las vicisitudes de la crisis que he descrito al principio de mi intervención, lo demanda el compromiso contraído por todos los países europeos de restaurar la estabilidad de la unión monetaria y lo exige, sobre todo, la necesidad de afanzar la recuperación de la economía española, su crecimiento

sostenible y el del empleo, porque para ello ahora es imprescindible la confianza y la credibilidad en nuestro proceso de consolidación fiscal y en nuestra solvencia. Podemos y debemos hacerlo. Les aseguro que la determinación del Gobierno es y va a seguir siendo plena y resuelta hasta conseguir el objetivo propuesto, a pesar de la dificultad que entraña tomar algunas decisiones por el esfuerzo que comporta para nuestros conciudadanos, de lo que somos muy conscientes.

Señorías, el Gobierno sabe del gran esfuerzo que hoy está pidiendo a la sociedad española, en particular a los pensionistas y a los empleados públicos: a los pensionistas, con la excepción, como he mencionado, de los perceptores de pensiones no contributivas, de los perceptores de pensiones contributivas que reciben complementos de mínimos y del antiguo régimen del SOVI no concurrente, pero a los pensionistas que son destinatarios de una decisión que incide, aunque excepcional y transitoriamente, en su poder adquisitivo; y a los empleados públicos, porque reconocemos el valor de su trabajo, de su dedicación, de lo que día a día aportan todos ellos, los profesionales sanitarios, los policías y guardias civiles, los educadores, los empleados del servicio público de empleo y tantos y tantos excelentes profesionales, excelentes servidores públicos. El esfuerzo que les pide hoy el Gobierno es para que otros muchos ciudadanos puedan seguir protegidos ante la situación de desempleo que padecen, para ayudar al futuro del país, para recuperar el crecimiento y la creación de empleo, para garantizar que las próximas generaciones sigan disfrutando del Estado del bienestar que hemos construido entre todos. No debemos olvidar lo que entre todos hemos conseguido y podemos preservar: el aumento de casi el 50 por ciento de la cuantía de las pensiones mínimas; el incremento del salario mínimo interprofesional; el número de becas que tienen hoy nuestros jóvenes; la mayor cobertura para nuestros desempleados; el esfuerzo en vivienda protegida y en facilitar el acceso a la vivienda de alquiler de nuestros jóvenes; las más de 500.000 personas que reciben ya atención por dependencia, por no hablar de los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar: la educación y la sanidad públicas.

Señorías, el Gobierno ha reaccionado a las distintas fases de esta crisis global, que ya nadie duda de que es la más compleja e intensa en muchas décadas. En cada momento hemos tomado medidas dirigidas a la consecución de dos objetivos básicos: mitigar la caída de la actividad y asegurar la cohesión social. Ahora las circunstancias han vuelto a cambiar, en apenas unas semanas, y lo han hecho en toda Europa. Es necesario que nos acomodemos a esas nuevas circunstancias, que aceleremos nuestro esfuerzo de consolidación fiscal y que hagamos un esfuerzo adicional colectivo para alcanzarla. Es necesario que cumplamos con nuestros compromisos europeos, que restablezcamos la estabilidad para propiciar que la recuperación se fortalezca, que nos imponamos todas exigencias adicionales de austeridad

y de rigor y que reforcemos la confianza en nuestra economía, porque hay motivos, y muchos, para confiar en ella y, ahora, con decisiones como la que hoy trae el Gobierno a la Cámara, debe haber todavía más.

Señorías, la mayor contención del gasto público hace necesario revisar nuestro objetivo de crecimiento económico para los próximos años. El menor gasto de las administraciones públicas indudablemente tendrá un impacto sobre la reactivación de la demanda agregada. Este efecto alcanzará su mayor intensidad el año que viene, para el que esperamos un crecimiento del producto interior bruto 5 décimas inferior al contemplado en la actualización del programa de estabilidad. A medio plazo, sin embargo, el impacto inicialmente contractivo se irá viendo compensado, porque la consolidación contribuirá a la reducción de la incertidumbre y tendrá así un impacto positivo sobre el coste de la financiación pública y privada.

Señorías, tan importante como las medidas de austeridad, lo son las reformas estructurales. En este momento las reformas pueden tener un efecto positivo inmediato sobre la confianza sin detraer ningún impulso por el lado de la demanda. Y más relevante incluso que ese efecto positivo inmediato, lo es el beneficio que van a reportar sobre nuestro crecimiento potencial, sobre la competitividad de nuestra economía y sobre su mayor capacidad de adaptación a los cambios, algo particularmente necesario en la eurozona. El Gobierno continuará realizando las reformas necesarias que hay planteadas en prácticamente todos los ámbitos significativos de la actividad económica con parecida determinación a la que hoy queremos mostrar ante nuestros conciudadanos, sin pausa, también con equidad y, desde luego, con máxima ambición de futuro y confianza en nuestro país. Ya se han dado pasos muy importantes para eliminar las trabas al desarrollo del sector servicios, para corregir las distorsiones existentes en el sector inmobiliario y de forma general, para orientar nuestra economía hacia un modelo más competitivo y más sostenible. Ahora es el momento de sacar adelante la reforma laboral y de dar un último impulso a la reordenación del sector financiero como paso previo a la reforma de la normativa que regula las cajas de ahorro. La demanda privada debe ahora tomar el relevo del gasto público como estímulo para la reactivación. Por eso es preciso actuar para favorecer la reactivación de la financiación al sector privado. Esta es la vía más efectiva para adoptar medidas de impulso a la demanda sin que suponga un coste presupuestario.

Señorías, en estos momentos no es tan necesario un aumento del crédito agregado como asegurar que no haya colectivos que por sus peculiares características, particularmente las pymes, queden sin acceso al crédito a pesar de ser solventes y contar con proyectos de inversión interesantes. Para corregir esta debilidad del sector financiero privado, además de acelerar la reestructuración del sector, el Gobierno está actuando directamente a través del ICO. Como saben, señorías, el paquete de medidas de Zurbano ha supuesto un refuerzo del papel

del ICO, destacando la próxima puesta en marcha de una nueva línea de préstamos directos a pymes y autónomos. Igualmente, hemos adoptado medidas para favorecer la actividad empresarial en general, así como iniciativas sectoriales centradas en las actividades más afectadas por la crisis, y ya están en marcha o lo estarán en breve. Señorías, el proceso de Zurbano sigue buscando soluciones compartidas en dos sectores básicos de nuestra economía, el sector de la energía y la reactivación de nuestra política industrial.

El Gobierno busca en cada momento la respuesta más apropiada frente a los cambios inesperados en la situación económica y financiera europea y global y trata de distribuir el esfuerzo que la sociedad debe realizar de la forma más equitativa posible. Las medidas que hoy les hemos presentado son dolorosas pero inevitables, ponen de manifiesto que el Gobierno no duda, ni lo va a hacer en el futuro, en asumir su responsabilidad y en adoptar las decisiones más convenientes para España en todo momento, por difíciles que estas puedan ser. Indudablemente, cuanto más amplio sea el respaldo político y social a las diversas iniciativas económicas, mayor será su eficacia y mayor la confianza en la misma. Por eso les pido, señorías, que faciliten y apoyen la convalidación del presente real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor **PRESIDENTE**: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

A continuación, pregunto a los grupos ¿alguno desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) El Grupo Popular y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Según el Reglamento, solo cabe un turno en contra y considera la Presidencia que debe ser para el grupo mayoritario. En consecuencia tiene la palabra don Mariano Rajoy. (Aplausos.)

El señor **RAJOY BREY**: Señor presidente, señorías, simple y claramente, no. Eso es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular al decreto-ley que el Gobierno ha traído a esta Cámara para su convalidación. Vamos a votar en contra por estimarlo improvisado, insuficiente e injusto. Las medidas que comprende se han tomado a la ligera, no atienden a las exigencias de la presente situación y cargan injusta e innecesariamente los desahuisados del Gobierno sobre los sectores más indefensos de la sociedad. Por lo tanto, reducción del déficit, sí. Y lo decimos desde la autoridad que nos otorga haberlo pedido desde hace mucho tiempo y de forma muy concreta en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, cuando solicitamos una reducción de 10.000 millones de euros, justamente la cantidad que, tras el recorte del mes de febrero, le obligan a hacer ahora para este año. Insisto, reducción del déficit, sí, pero no así, no haciéndolo recaer sobre las capas más indefensas de nuestra sociedad.

Señorías, en la improvisación no necesito insistir demasiado porque es palmaria. Son medidas que se han

adoptado de la noche a la mañana, precipitadamente, con el acostumbrado estilo del como sea, y así ha sido, como sea. Tres días antes de tomar estas medidas, el señor Rodríguez Zapatero dijo —y todo el mundo pudo oírlo— que incrementar la reducción del déficit era un error. Tres días más tarde sostuvo todo lo contrario; este es el plazo que dedicó a una metamorfosis de esta envergadura, tres días. Tan de improviso se iluminaron las ideas de S.S., tan repentinamente y tan sin preparación, que ha necesitado once días y todo el aparato administrativo del Estado para que sus decisiones pudieran llegar al Boletín Oficial del Estado. Tan de improviso y tan atropelladamente se han confeccionado los recortes del gasto que a las pocas horas de aparecer las medidas en el Boletín Oficial del Estado las han tenido que reformar. Por cierto, señora vicepresidenta, ¿cómo era aquello de que los españoles nos merecemos un Gobierno que no nos mienta? (Aplausos.) Porque vamos a ver, ¿dijo usted o no dijo el pasado martes que el cambio de fechas era una simple corrección de errata? ¿Y dijo o no dijo ayer el presidente del Gobierno en los pasillos de esta Cámara que era una rectificación? Pues eso, un Gobierno que no nos mienta. (Aplausos.)

Y es que, con las prisas, no les ha dado tiempo para consultar ni con la Federación de Municipios, ni con los socios del Pacto de Toledo, ni con nadie que pudiera poner límite a esta arbitrariedad apresurada. Rectifica el señor Rodríguez Zapatero de la noche a la mañana y nos dice que se debe a un cambio en las circunstancias. ¿A qué llama circunstancias S.S.? ¿A las exigencias del Fondo Monetario? ¿A las imposiciones de los socios europeos? ¿A esa especie de consenso internacional que le ha dicho: hasta aquí hemos llegado? Porque esas son las únicas circunstancias que han motivado este decreto-ley. Al señor Rodríguez Zapatero se le ha obligado a cumplir un deber que no cumplía, que no quería cumplir y que no pensaba que le cayera encima como le ha caído. No hay más circunstancias que las que él mismo ha creado, y no son de hoy, no han surgido en tres días. Lo que ocurre es que ahora no le queda más salida que aceptar a las duras lo que no quiso reconocer a las maduras. Pero quede claro que le obligan al recorte, que le fijan la cuantía, pero que nadie le ha dicho en qué partidas tenía que meter la tijera. (Aplausos.) La elección es suya y solo suya. (Aplausos.)

Señorías, he mencionado antes que este decreto-ley, además de improvisado, era insuficiente. Esto tampoco necesita mucha argumentación. A cualquiera se le alcanza que con este real decreto no se creará ni un solo puesto de trabajo, todo lo contrario. Por eso estas medidas acentúan la necesidad de adoptar otras que fomenten el crecimiento y el empleo, las que llevamos dos años reclamando sin que el señor Rodríguez Zapatero reaccione, las mismas que le ha solicitado hace tres días el Fondo Monetario Internacional, que es quien, junto con la Unión Europea, tutela ya su política económica. Es obvio que no será posible reducir de verdad el déficit sin que mejoren los ingresos públicos, y no será posible que

estos mejoren sin crecimiento y sin empleo. Para salir de este trance, lo vuelvo a repetir en esta Cámara, España necesita un plan integral de actuaciones (**Aplausos.**) que, además de ahondar en la reestructuración del gasto público, liberalice mercados y consolide el sistema financiero. Hablamos de reformas reales, de reformas eficaces, no de meras palabras, ni de sucedáneos para enseñar en un telediario. Señor presidente, cualquier tipo de recorte del gasto público debe estar incardinado en un plan global de actuación, porque en caso contrario el sacrificio será inútil y vendrán más sacrificios todavía.

En tercer lugar, señorías, este decreto-ley es rechazable porque es injusto, profundamente injusto. Contempla un recorte en los gastos sociales como no se había conocido en esta democracia; nunca se había conocido un recorte igual. El señor Rodríguez Zapatero, con las prisas, con las improvisaciones y con el como sea, ha ido a lo fácil, a lo débil, a lo resignado, y castiga particularmente a aquellos a los que ya no les queda ninguna capacidad para defenderse, que son los pensionistas. (**Rumores.—Aplausos.**) Señorías, ¿qué esperanza tiene un pensionista de mejorar su situación, de recuperar un día el poder adquisitivo que hoy pierde? Señorías del Grupo Socialista, ¿qué clase de decreto-ley es este que deposita en las espaldas de los más débiles las consecuencias del despilfarro irresponsable del señor Rodríguez Zapatero? A ustedes se lo pregunto. (**Aplausos.**) Señorías, ¿de verdad no había 1.500 millones de euros en el presupuesto de donde recortar, antes que recortárselo a los pensionistas? (**Aplausos.**) ¿De verdad que no los había? Los hay. (**Aplausos.**)

Señora vicepresidenta, ¿por qué algunos empleados públicos quedan excluidos del recorte y otros no? ¿Será porque pueden hacer una huelga? Los pensionistas no pueden hacer una huelga. ¿Es por eso por lo que están en el decreto, porque son los sectores más débiles de la sociedad? ¿Es por eso? (**Aplausos.**) ¿Y qué es esto de que el Gobierno se permita tocar las pensiones por su cuenta y por real decreto? Señorías, es la primera vez desde hace quince años, desde 1995, cuando se creó el Pacto de Toledo, que alguien hace esto, cagárselo porque quiere. Porque ¿para qué queremos ahora el Pacto de Toledo? ¿Qué caso se puede hacer de un pacto que el gobernante de turno puede cargarse por decreto? Oiga, es que aquí teníamos un acuerdo que resolvía un problema, y lo resolvía satisfactoriamente, y el señor Rodríguez Zapatero ha destrozado el acuerdo. Un gran pacto de Estado, otro pacto de Estado más que destroza, y ha resucitado el problema. (**Aplausos.**) Eso es lo que ha pasado aquí.

Ni siquiera han intentado hacer, señorías, todo lo que fuera posible para evitar el recorte de los gastos sociales, ni siquiera lo han intentado. El otro día ofrecí algunas ideas, pero no insistiré hoy. (**Varios señores diputados: ¡Oh!**) Lo que este decreto-ley revela no es tanto la falta de ideas... (**Rumores.**)

El señor **PRESIDENTE**: Silencio, por favor. (**Pausa.**) Silencio, por favor.

El señor **RAJOY BREY**: Lo que este decreto-ley revela no es tanto la falta de ideas como la falta de voluntad. Lo más sarcástico, escuchen ustedes, señorías, es que con los 13.000 millones que se han despilarrado por parte del Gobierno para que los municipios arreglaran aceras y jardines, sin crear un solo puesto de trabajo estable,... (**Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.**)

El señor **PRESIDENTE**: Silencio.

El señor **RAJOY BREY**: ...el Gobierno no hubiera necesitado arramblar con el dinero de las pensiones, ni tocar el bolsillo de los funcionarios, ni hacer un decreto-ley tan injusto como este. Esta es la verdad. (**Aplausos.**)

En suma, señorías, no podemos aprobar este decreto-ley porque responde a la improvisación, porque las medidas son insuficientes, no crean crecimiento económico ni empleo, y sobre todo porque son profundamente injustas y, además, sin necesidad, que es lo peor. Decirle no a este decreto no significa negar la necesidad de reducir el déficit, ni mucho menos. El señor Rodríguez Zapatero el pasado martes, en sede parlamentaria, en el Senado, tuvo la desfachatez de afirmar que el Partido Popular es el único en toda Europa que se opone a la reducción del déficit. Faltaba a la verdad. (**Un señor diputado: Como siempre.**) Y faltaba a la verdad a sabiendas de que lo estaba haciendo, porque fui yo, en nombre de este grupo parlamentario, quien en esta misma Cámara, el pasado 9 de septiembre, hace ya casi un año, le dijo lo siguiente (**Un señor diputado: A ver.**): Yo le ofrezco un pacto, un pacto para reducir el gasto del conjunto de las administraciones públicas y también para explicárselo al conjunto de los españoles. Y fue el Partido Popular, como recordaba antes, el que presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para reducir el déficit en 10.000 millones de euros. Y falta a la verdad a sabiendas, porque fue el Partido Popular al que el presidente del Gobierno le dijo que se equivocaba al pedir una mayor reducción del déficit, en fecha tan cercana como el pasado 5 de mayo, señor presidente del Gobierno. (**Aplausos.**) Señorías, no nos oponemos a la reducción del déficit. Era una tarea que debía haberse hecho ya hace mucho tiempo. Hay una alternativa a este real decreto improvisado e injusto, que hace daño a mucha gente que no tiene por qué pagar los errores del Gobierno. Ustedes no han querido.

Señor presidente, a todo esto añadido que no vamos a apoyar este real decreto porque el primer problema, el primero de la economía española hoy, se llama desconfianza, y ocurre que es el señor Rodríguez Zapatero y su peculiar manera de hacer y sobre todo de no hacer las cosas la principal fuente de esa desconfianza, porque no se le ve ni plan global de actuación ni intención de pro-

curar la salida de la crisis. Vamos a ver, señoría, ¿acaso ha hablado con el resto de los grupos políticos sobre estas cosas? Yo terminaba mi intervención el pasado día 12 en esta Cámara diciendo lo siguiente, el pasado día 12: Señor presidente, si está usted dispuesto a hablar de todo esto, yo estoy a su disposición y, además, lo estoy esta misma tarde. Por tanto, quedo a la espera de su respuesta. Es obvio que el presidente del Gobierno no ha encontrado un hueco en su agenda para tratar de llegar a un acuerdo sobre una reducción más justa y más equitativa del déficit.

Señores socialistas, saben ustedes que es verdad. Saben ustedes que en una hora podíamos encontrar una alternativa a la reducción de las pensiones que se le hace a los pensionistas españoles. Saben que es verdad y no han querido hacerlo. El real decreto-le y no merece nuestro apoyo ni está el señor Rodríguez Zapatero en condiciones de pedirlo. Más bien al contrario. En mi modesta opinión, el presidente del Gobierno ha logrado convertirse en el principal problema de la economía española. **(Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Bien! ¡Muy bien!)** No estamos asistiendo solamente a la quiebra de sus propios planteamientos. Este decreto-le simboliza el fracaso de toda su política, no solo la económica; de toda su política. Y, desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir con su voto a que su problema, el principal de la economía española, usted, siga ahí. Y si otros lo hacen será su responsabilidad, la nuestra está muy clara. **(Aplausos.-Rumores.)**

El señor **PRESIDENTE**: Silencio, por favor.

El señor **RAJOY BREY**: En resumen, el real decreto-le es improvisado, es injusto, es insuficiente porque no crea empleo ni riqueza, rompe los acuerdos del Pacto de Toledo, se impone y se ha hecho sin hablar con nadie y, además, lo presenta una persona en la que no creemos y que es el peor lastre para la economía española.

Muchas gracias. **(Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.—Varios señores diputados: ¡Bravo!)**

El señor **PRESIDENTE**: Silencio, por favor.

Para fijar la posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar doña Uxue Barkos.

La señora **BARKOS BERRUEZO**: Gracias, presidente.

Señorías, señor presidente del Gobierno, hay otra manera de hacer las cosas a como se han reseñado ahora mismo desde esta tribuna y a como nos ha presentado usted este real-decreto. **(Rumores.)**

El señor **PRESIDENTE**: Por favor, guarden silencio.

La señora **BARKOS BERRUEZO**: Se lo planteábamos ayer un grupo de diputados y de partidos en esta

Cámara, y hay otras maneras de contener el déficit. En cualquier caso, el voto de Nafarroa Bai al real-decreto que hoy nos presenta es inequívoco, un no rotundo, por muchos motivos pero agrupados en dos ejes. En primer lugar, porque la propuesta que nos trae usted no es un planteamiento integral de respuesta a la contención del déficit. **(Rumores.)** Nos ha presentado un tijeretazo por donde caiga, fe de errores en torno a los ayuntamientos...

El señor **PRESIDENTE**: Un momento, señora Barkos, un momento.

Por favor, les ruego, si tienen la bondad, que quienes piensen abandonar el salón de sesiones lo hagan con la mayor rapidez posible y en silencio, por respeto a la oradora que está en la tribuna. Espere un momento. **(Pausa.)** Adelante.

La señora **BARKOS BERRUEZO**: Gracias, presidente.

Les decía que lo que nos trae es un tijeretazo por donde caiga, fe de errores sobre ayuntamientos incluida y sin buscar alternativas. Y las hay. Hay otras maneras de afrontar la situación, empezando por ajustar el capítulo de gastos y el capítulo de ingresos. Insisto en que ayer mismo se lo ofrecíamos con mayoría sólida en esta Cámara, si ustedes quisieran. Si el esfuerzo ha de ser igual para todos, habrá que pedir un mayor esfuerzo también en aquellas rentas de trabajo y de capital que tienen un margen amplio para arrimar el hombro. **(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)**

De este argumento se deduce también el segundo motivo para el no, la voluntad uniformizadora de este decreto y por tanto su deriva injusta e ineficaz. Injusta porque, si atendemos a las realidades individuales, el decreto exige un esfuerzo especialmente duro a los pensionistas, para los que propone no ya una congelación —no es cierto—, es una rebaja, porque estamos en la antesala de una subida de 2 puntos del IVA. Además, es absolutamente ineficaz por uniforme en lo sectorial y en lo territorial. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se les puede negar a todos los ayuntamientos, a todos por igual, una posibilidad de endeudamiento acorde con el compromiso europeo? ¿Cómo que aquellos ayuntamientos que hicieron bien el trabajo en vacas gordas no van a poder utilizar su margen de endeudamiento para superar un momento de escasez? ¿Cómo puede pedir a los ayuntamientos o a los territorios forales que cedan su capacidad de gestión porque otros lo hicieron mal? Y sobre todo, fundamental, ¿dónde está en este decreto la garantía de que quienes lo han hecho bien no se vean arrastrados?

Lo voy a explicar de otra manera. Algunos quisieron hacer bien poco de la economía española una nueva Grecia. Usted, todo su Gobierno, todos nosotros, todas las instituciones, nos hemos negado absolutamente a esa similitud. Pues bien, no quiera ahora hacer de todos los ayuntamientos pequeñas grecias. No podemos comparar es inadmisibile, el déficit de Madrid o de Valencia con el

Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El voto sí es por la convalidación, el voto no es por la derogación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 169; en contra, 168; abstenciones, 13.

El señor **PRESIDENTE**: Queda convalidado el real decreto-ley.

A continuación, pregunto si algún grupo parlamentario desea su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Pausa.) Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En tal caso, pasamos a someter a votación la solicitud de tramitación antedicha.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 168; en contra, 169; abstenciones, 13.

El señor **PRESIDENTE**: Queda rechazada la solicitud de que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

— **ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2009. (Número de expediente 110/000186.)**

— **ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009. (CORRECCIÓN DE ERROR EN «BOCG, SERIE A, NÚMERO 288, DE 12 DE ABRIL DE 2010). (Número de expediente 110/000188.)**

— **CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO**

SEXUAL, HECHO EN LANZAROTE EL 25 DE OCTUBRE DE 2007 Y DECLARACIONES AL MISMO. (Número de expediente 110/000189.)

— **ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, HECHO EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2010. (Número de expediente 110/000190.)**

— **DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000191.)**

El señor **PRESIDENTE**: Pasamos a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Señorías, ¿se pueden dar aprobados por asentimiento los que figuran en el orden del día? (Asentimiento.)

Quedan aprobados por asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

— **PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)**

El señor **PRESIDENTE**: Votamos, a continuación, las enmiendas al proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez. Votamos la enmienda número 25.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 155; en contra, 183; abstenciones, 12.

El señor **PRESIDENTE**: Queda rechazada.

A continuación, votamos el resto de las enmiendas de la señora Díez.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, uno; en contra, 334; abstenciones, 15.